

Opinión

Cambio climático:
Los costes de la inacciónErnest
Reig

Las recientes inundaciones que han afectado a la Comunidad Valenciana y a algunas localidades del resto de España no constituyen un fenómeno desconocido e inhabitual –salvo por su magnitud catastrófica–, y obligan a reflexionar sobre los enormes costes de abordar con un exceso de timidez la lucha para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y aplazar la adopción de medidas de adaptación frente al cambio climático. Recientemente, la Agencia Europea del Medio Ambiente ha estimado que, entre 1980 y 2023, los costes de los fenómenos climáticos extremos en la Unión Europea ascendieron a 738.000 millones de euros (a precios de 2023), de los que el 44% correspondieron a los riesgos hidrológicos (inundaciones). Los datos de la Agencia marcan además una tendencia creciente, con unas pérdidas anuales entre 2020 y 2023 que más que quintuplicaron las del periodo de 1980 a 1989. Esos daños económicos se vieron acompañados por 241.000 muertes entre 1980 y 2023, asociadas principalmente a olas de calor.

Es importante tener esto en cuenta cuando se advierte del coste para el crecimiento económico supuestamente atribuible a las regulaciones públicas en favor del medioambiente y a la desviación de recursos que podrían tener un uso estrictamente productivo –*business as usual*–, para efectuar inversiones dirigidas a la prevención de riesgos climáticos. Sin embargo, todo apunta a que el coste de la inacción medioambiental es mucho mayor, y a que se tiende a infravalorar los riesgos derivados del cambio climático, no sólo para el bienestar humano en general, sino también para la actividad económica.

Muchos economistas destacados ya no consideran válida la idea de que haya que optar necesariamente entre las políticas de mitigación del cambio climático y las que promueven el crecimiento económico. Señalan que se infravaloran los costes del cambio climático cuando se asume que sus efectos se limitan a pérdidas temporales de producción –impactos sobre el nivel del PIB–, sin considerar su efecto negativo sobre elementos impulsores del crecimiento del PIB tan importantes como la productividad del trabajo –efectos sobre la salud– y sobre la productividad y la formación de capital –obsolescencia de tecnologías e infraestructuras diseñadas para condiciones climáticas distintas de las actuales, pérdidas de capital productivo en catástrofes naturales–, así como sobre ecosistemas de los que dependen, por ejemplo, los rendimientos de la producción agrícola.

Suelen ignorarse los riesgos climáticos de difícil o imposible modelización, como la aparición de puntos de inflexión que más allá de ciertos umbrales de temperatura pueden cambiar el clima en forma irreversible, con consecuencias catastróficas. Incumplir los acuerdos de la cumbre del clima de París y alcanzar a finales del presente siglo temperaturas medias que superen entre 4 y 6 grados las propias de la era preindustrial –algo que nunca ha ocurrido a lo largo de la historia evolutiva de nuestra especie– significa introducirse

en escenarios marcados por una incertidumbre radical.

Una mayor frecuencia a escala planetaria de eventos extraordinarios, como las inundaciones de Valencia, es un rasgo característico del calentamiento global en la literatura sobre cambio climático, y sus consecuencias (pérdida de vidas humanas y de patrimonios familiares, destrucción de infraestructuras, desaparición de empresas, colapso en los sistemas de transporte) forman parte de los costes de la inacción. Abstenerse por razones de presupuesto, o por su escasa visibilidad y rentabilidad política a corto plazo, de realizar las necesarias actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático, como las de prevención de avenidas en zonas inundables de Valencia, genera con posterioridad costes y desembolsos presupuestarios mucho mayores.

Beneficios y oportunidades de negocio

Las políticas dirigidas a hacer frente al cambio climático no sólo representan costes que hay que asumir, sino que también ofrecen beneficios y nuevas oportunidades de negocio incluso desde una perspectiva meramente económica. La definición de políticas industriales y de estrategias de I+D+i claras y estables a favor de la descarbonización y del impulso a las tecnologías limpias (energías renovables, baterías, coches eléctricos, etc.) se ha de contemplar como un factor de reducción del riesgo empresarial, y por tanto favorable a la inversión. A ello hay que añadir que el coste inicialmente previsto de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas se está reduciendo gracias

al espectacular abaratamiento y expansión internacional de tecnologías como la solar fotovoltaica y la eólica. Según un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la inversión en las principales tecnologías limpias alcanzó los 235.000 millones de dólares en 2023, y el valor de mercado de los activos propios de esas tecnologías se ha cuadruplicado desde 2015 y se espera que se triplique de aquí a 2035. Sin embargo, y a pesar de este rápido despliegue, todavía el año pasado las dos terceras partes del incremento mundial en la demanda de energía se cubrieron mediante la basada en combustibles fósiles.

La experiencia de los últimos años indica que favorecer desde las políticas públicas la explotación de economías de escala y aprendizaje permite rápidas reducciones de costes que facilitan la difusión de tecnologías mitigadoras del cambio climático, pero para ello es importante que la acción de los gobiernos no se limite a establecer mecanismos de mercado para la determinación del precio del carbono. La regulación ambiental es también imprescindible, así como un amplio esfuerzo desde el sector público dirigido a reorientar la innovación de las empresas hacia tecnologías limpias, rompiendo con la inercia de trayectorias tecnológicas dependientes de la producción de bienes contaminantes y del uso de combustibles fósiles. La gran movilización internacional de recursos que permitió lograr vacunas para el Covid-19 en un plazo mínimo da una idea de lo que puede lograrse combinando la voluntad política y los recursos públicos con la agilidad de respuesta de la empresa privada para alcanzar objetivos climáticos. Siempre que la conciencia de la urgencia de actuar logre imponerse a la inacción.

Universitat de València e Ivie

Los gobiernos no pueden limitarse a crear mecanismos para determinar el precio del carbono